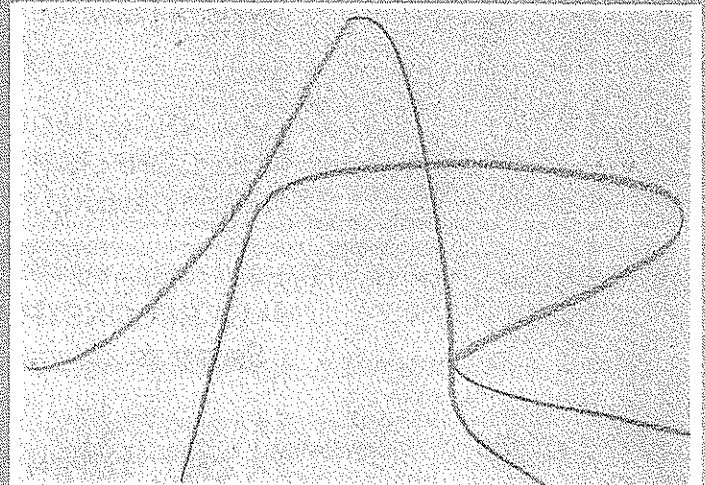


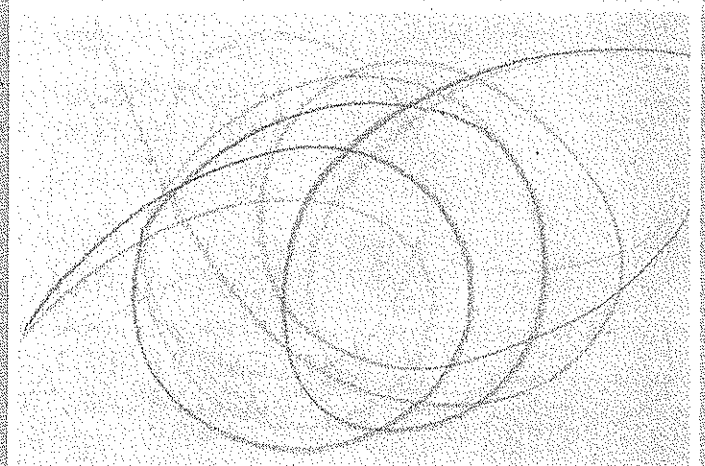
COMUNIDAD

Nº 1 — Nueva época — Junio de 1991
Circula con "Voz"

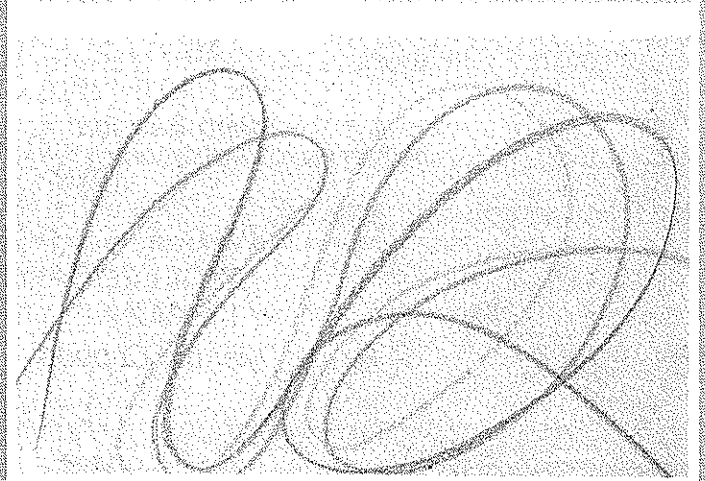
Negociación



Constituyente



Reconstrucción
de la política



Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Instituto Nacional de Educación Obrera

SABOTAJE ECONOMICO: DE LA URIBE A CRAVO NORTE

Jairo Estrada A.*

En el tiempo transcurrido entre el ataque de fuerzas combinadas del ejército y la fuerza aérea al campamento del Estado Mayor de las FARC en La Uribe el 9 de diciembre de 1990 y el primer contacto de las delegaciones de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el gobierno nacional en Cravo Norte, se desarrolló una controvertida modalidad de la lucha guerrillera no conocida en el país en cuanto su dimensión y cobertura: el sabotaje económico.

En efecto, de las tradicionales acciones propias de la táctica de la "guerra de guerrillas", la CGSB transitó hacia una forma de lucha que parece haber mostrado efectos favorables desde la perspectiva del propósito pretendido: forzar al gobierno nacional a la negociación y al diálogo y presionarlo en la búsqueda de la solución política al conflicto armado. El sabotaje económico como recurso para la negociación habría de señalar que existen caminos distintos a los recorridos en los campamentos de los hoy desmovilizados grupos guerrilleros del M19, el sector mayoritario del EPL, el PRT y el Quintín Lame.

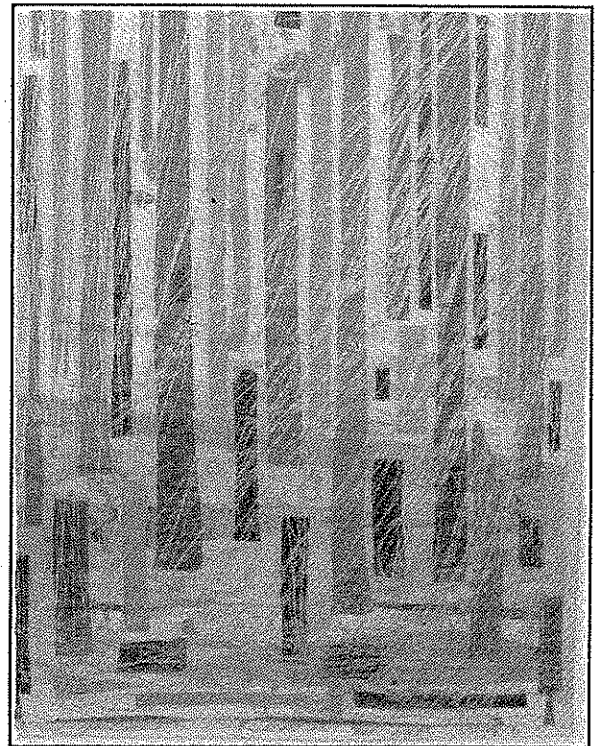
Frente a la concepción imperante en importantes sectores de la sociedad, que oscilan entre la derecha política y las opciones democráticas, en el sentido de la carencia de vigencia histórica de la acción armada con la consecuente "dejación de armas", se ha observado que el conflicto armado en Colombia no se puede tratar con estereotipos y que, así como no tiene sentido exigir una "revolución por decreto", tampoco es posible pensar en una "cesación por decreto" de una forma de lucha desarrollada en más de 40 años debido a condiciones socioeconómicas y políticas; que si bien han sufrido modificaciones, no han desaparecido en lo esencial.

Es cierto que el sabotaje económico produce efectos colaterales que lo pueden agotar, sobre todo cuando afecta la población civil al

deteriorar sus condiciones de vida y de trabajo y estar asociado a operativos militares contra ella. Pero también lo es que él representa una respuesta legítima ante las pretensiones de profundización de la guerra o de búsqueda de una solución exclusivamente militar, como pareció ser el sentido del ataque a Casa Verde. Si en su momento se pensó, que de la llamada Operación Centauro podría resultar un debilitamiento del movimiento insurgente para colocarlo en el terreno de los esquemas practicados con los otros grupos guerrilleros, los cinco meses transcurridos desde entonces demostrarían que dicho propósito produjo más bien una reacción no esperada: 208 sabotajes a la infraestructura económica del país en 17 departamentos y 4 intendencias a un costo que supera entre tanto los 500 millones de dólares —sin considerar los costos de mantenimiento de los operativos militares— (Ver cuadro No. 1).

**Jefe Departamento de Investigaciones CEIS-INEDO*

La recolección de información, que posibilitó la realización de este trabajo, fue desarrollada por William Moreno



Rasgos generales del sabotaje económico

Las acciones de sabotaje emprendidas por la CGSB se orientaron fundamentalmente a la infraestructura petrolera, energética, de comunicaciones, vial y de transporte fluvial y de carretera y pretendieron afectar el capital transnacional, así como sectores del capital nativo comprometidos directa o indirectamente con la guerra sucia.

Su propósito estuvo al parecer dirigido a desestabilizar las condiciones globales de reproducción del capital, es decir, a mostrar que este también puede verse afectado por una eventual e innecesaria prolongación del conflicto armado. En ese sentido, se buscaba ampliar el abanico de presiones al diálogo; como en efecto sucedió con las transnacionales petroleras, los transportadores de carga y de pasajeros y las compañías cementeras, para mencionar ejemplos de los directamente afectados, quienes urgían acuerdos y requerían seguridad.

De las 208 acciones contabilizadas por el CEIS-INEDO, el 65 por ciento se llevó a cabo en los meses de enero y febrero, mostrándose una tendencia a la disminución en los meses de marzo y abril con el 13.5 y el 7.7 por ciento respectivamente. Es interesante observar que modificaciones en la intensidad de las acciones estuvieron asociadas a cambios en las posturas gubernamentales frente al diálogo, como se verá más adelante.

De otra parte, del total de las acciones de sabotaje económico, en su orden, el 28.8% afectó a la infraestructura vial y de transporte —voladuras de puentes, quema de tractomulas, camiones, carrotanques y buses—; el

25% a la infraestructura petrolera —voladura de oleoductos, instalaciones y equipos—; el 22.6% a la infraestructura energética —voladura de torres de energía—; el 5.7% a la infraestructura de comunicaciones —voladura de estaciones repetidoras y otras instalaciones y el 17.8% a otros, entre los que se cuenta la voladura de gasoductos, la quema de avionetas en tierra, el derribamiento de helicópteros, la voladura de planchones y los sabotajes a la Licorera del Putumayo y a Cementos Nare, etc. (Ver gráfica 1).

Las acciones de sabotaje cubrieron la mayor parte de la geografía nacional, demostrando una capacidad operativa del movimiento insurgente, que lleva a pensar que la CGSB había previsto la posibilidad de un ataque masivo a Casa Verde, pues es obvio que una respuesta con semejante dimensión y cobertura

requiere, desde el punto de vista militar, una preparación logística adecuada y no puede ser objeto de improvisación.

En ese sentido, las fuerzas armadas del régimen mostraron serios límites en su labor de inteligencia militar y en la misma capacidad operativa. Ante la opinión pública quedó claro que en los cálculos de los gestores de la profundización del conflicto armado no se había considerado ni la capacidad de respuesta inmediata de las guerrillas de las FARC —en un sentido militar los resultados presentados al país se situaron exclusivamente en términos del "boom" publicitario—, ni mucho menos el alcance de la reacción ofensiva guerrillera de la Coordinadora en su conjunto en el corto plazo. Desde esa perspectiva, la fracasada Operación Centauro habría de generar dos efectos colaterales: de una parte, condujo a la "socialización" de

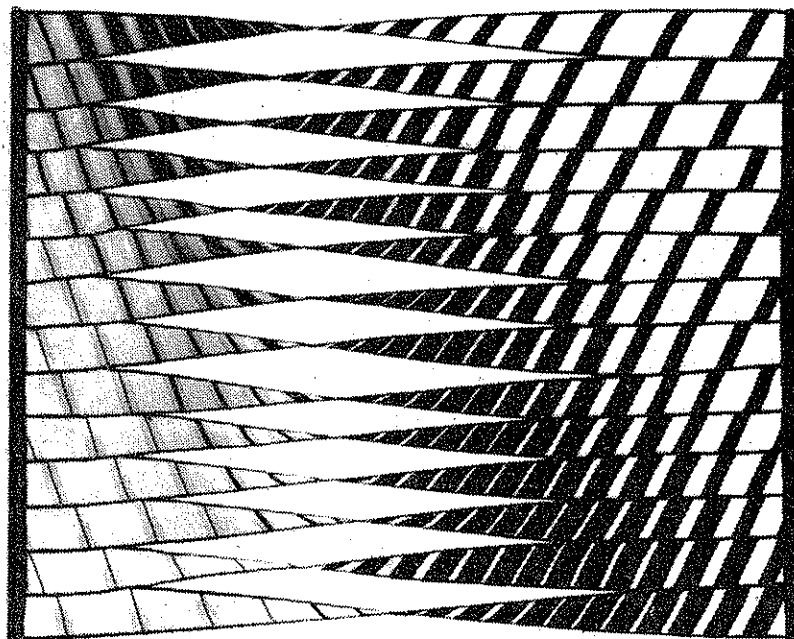


la discusión de la política de defensa nacional, hasta entonces tema tabú de exclusivo resorte del mando militar del régimen, cuestionando los contenidos de las imperantes concepciones de la "seguridad nacional". De la otra, indujo a la consolidación del accionar militar combinado de las fuerzas guerrilleras del ELN, las FARC y los reductos no desmovilizados del EPL, superando el nivel esencialmente político de predominio hasta ese momento.

Del total de las acciones de sabotaje de la Coordinadora, el 55.5 por ciento se concentró en Santander, Antioquia, Bogotá y Cundinamarca. En su orden siguieron Cauca, Putumayo y Cesar con el 5.7%, 5.68%, y 4.3% respectivamente (Ver gráfica No. 2).

Sabotaje, economía y diálogo

Las dimensiones del sabotaje económico produjeron efectos sobre la economía de diversa índole, los cuales se deben considerar no solo en el sentido de las pérdidas producidas de manera inmediata —que como ya se había dicho superan los 500 millones de dólares— sino desde una perspectiva macroeconómica. El sabotaje se convirtió de hecho en un factor no calculado en el desarrollo de la política antinflacionaria, pues provocó presiones sobre el nivel de precios al encarecer transitoriamente algunos productos de origen agrícola; el sabotaje incidió sobre la política de equilibrio fiscal obligando a recortes presupuestales en favor de los gastos de financiación de la guerra y generó la expedición de los decretos 416 y 1017 de 1991 que contienen los impuestos de guerra que obligan a los grandes contribuyentes a cofinanciar el conflicto armado; el sabotaje condujo a la preparación de medidas que buscaban



generalizar los efectos del conflicto en la población civil, como en el caso del suspendido decreto de restricción del tránsito de vehículos particulares; así mismo afectó los proyectos de atracción de inversión extranjera, propios de la apertura económica, pues es lógico que dicha inversión no llega con la inseguridad existente en diversas regiones del país. Por ello, no es casual que los primeros meses del año hayan registrado una disminución absoluta de la inversión con relación a años precedentes.

En otras palabras, el sabotaje económico ha sido un anuncio de lo que puede significar para el país una prolongación del conflicto armado; el ha mostrado en forma cruda las inclemencias de la guerra y es una admonición para quienes todavía juegan las cartas de una solución militar. La confrontación armada no es un "negocio" para el gobierno y el gran capital, pero tampoco lo es para el movimiento insurgente, que puede agotar el recurso del sabotaje económico por las incidencias sobre la población civil.

Ahí radican justamente algunas de las expectativas en torno a la negociación entre la Coordinadora y el gobierno.

Desafortunadamente, ese fue el camino que tuvo que recorrer el país para llegar al punto en que se encuentra: a las puertas de una posible solución política negociada del conflicto armado. Aunque no sea del parecer de quienes se han inscrito en otros proyectos de democratización de la sociedad colombiana, lo cierto es que el sabotaje económico obligó a rápidos cambios en la postura gubernamental frente al diálogo. Veamos: de la posición del ministro de Gobierno Humberto de la Calle Lombana, "no hay clima para dialogar" (enero 3) y del consejero Jesús Bejarano "no habrá diálogo mientras haya terrorismo" (enero 4), el presidente Gaviria anunció al país que "el gobierno está dispuesto a proporcionar de inmediato acercamientos directos y expeditos con las FARC y el ELN, para llegar a terrenos firmes de paz y convivencia" (enero 26). A

GRAFICO N° 1
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ACCIONES DE SABOTAJE ECONOMICO
DE LA C.N.G.S.B. SEGUN OBJETIVO
(DICIEMBRE 9 DE 1990 ABRIL 30 DE 1991)

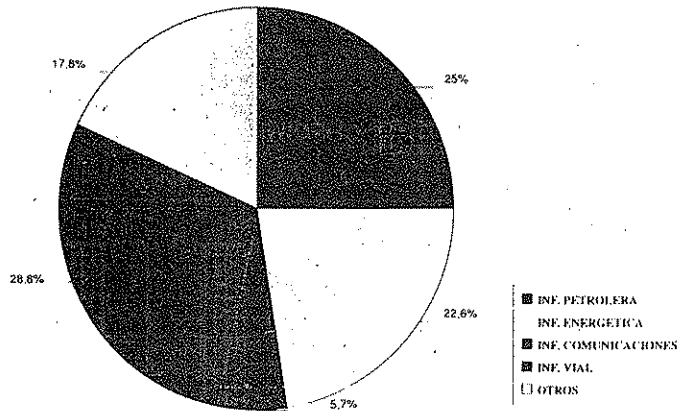
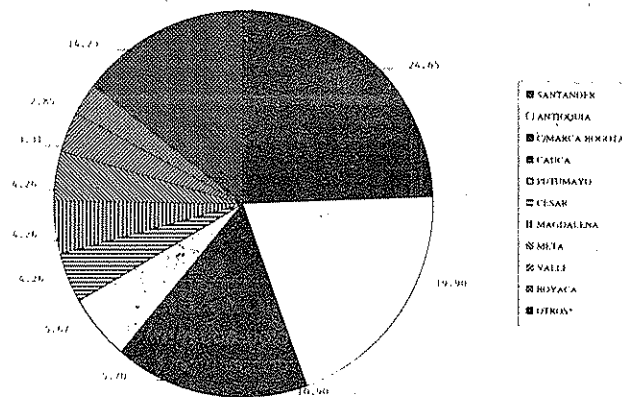


GRAFICO N° 2
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ACCIONES DE SABOTAJE ECONOMICO
DE LA C.N.G.S.B. SEGUN DEPARTAMENTO O INTENDENCIA
(DICIEMBRE 9 DE 1990 ABRIL 30 DE 1991)



* In: Ines, Arauca, Casanare, Guaviare, Guayana Francesa, Bolívar, Guantánamo, Bolívar, Guantánamo, Bolívar y el resto de Frontal

CUADRO No. 1
ACCIONES DE SABOTAJE ECONOMICO
DE LA C.N.G.S.B. SEGUN OBJETIVOS
(Diciembre 9/1990 - Abril 30/1991)

MES	IN-FRAESTRUC-TURA PETROLERA	IN-FRAESTRUC-TURA ENERGETICA	IN-FRAESTRUC-TURA COMUNICACIONES	IN-FRAESTRUC-TURA VIAL	OTROS	TOTAL
Diciembre	3	4	1	12	8	28
Enero	21	5	7	24	10	67
Febrero	16	25	2	17	9	69
Marzo	6	9	-	7	6	28
Abril	6	4	2	-	4	16
Total	52	47	12	60	37	208

partir de esa afirmación se desarrollaron gestiones por parte de la Comisión de Diálogo de la Cámara de Representantes, intervino la Conferencia Episcopal, con una gestión de buenos oficios y se entró en un punto muerto —propiciado por quienes desde el gobierno y la consejería han querido dejar al movimiento insurgente por fuera de la Constituyente—, que finalmente fue superado con el ingreso de tres representantes de la CGSB a la embajada de Venezuela (abril 30) y el primer contacto gobierno-Coordinadora en Cravo Norte.

Con el inicio del diálogo en Caracas y la posibilidad de concretar una agenda de negociación, se ha transitado a una nueva fase, seguramente prolongada, con contradicciones, obstáculos y previsible rupturas transitorias —si consideramos experiencias internacionales y el hecho de que persisten las fuerzas interesadas en una "solución militar"—. La eventual no participación activa del movimiento guerrillero en armas en la Asamblea Constituyente muestra uno de los límites que esta tendrá: no lograr expresar plenamente el "acuerdo de paz" anhelado por los colombianos. En todo caso, la posibilidad histórica de la negociación estará asociada a una gran batalla de las partes por la opinión pública, lo cual exige desde la óptica del gobierno, una reformulación de su política de seguridad nacional (ver documento gubernamental, "La estrategia nacional contra la violencia") y desde la de la CGSB la concreción de sus propuestas políticas y sociales, todavía generales, considerando los requerimientos del momento.